

AGENDA

Nº 13 - NOVIEMBRE 2025

CLOCK IS TICKING

Se acaba el tiempo; es momento de **definiciones** económicas y políticas. El debate entre la **libertad** y el **populismo** no admite posiciones intermedias.



EN ESTA EDICIÓN

Carlos Díaz-Rosillo
Julián Obiglio
Andro Krstulović Opara
Roberto González
Luis Galarreta
Francisco Millán
Federico Pinedo
Pablo Hispán
Paulo Neves
Felix Maradiaga
Aparicio Caicedo
Wazim Mowla

América Latina vive el momento electoral que marcará la política del mundo.

Croacia: un apoyo a la defensa y seguridad europea.

Perú a un paso de la estructura bicameral.

EE.UU. pone un freno al socialismo en la geopolítica.

Europa y América Latina agudizan el multilateralismo.

Argentina, tras las elecciones de medio término, se fortalecen las políticas liberales.



Carlos Díaz-Rosillo, Ph.D. 

Director Fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom (FIU).

Reflexión mensual

Triunfos judiciales de Uribe y Fujimori: justicia, libertad y liderazgo hemisférico

Hace unas semanas, se conocieron dos fallos trascendentales que reivindicaron a dos prominentes líderes democráticos en el hemisferio. En Colombia, un tribunal de apelaciones anuló la injusta condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dejándolo absuelto de todos los cargos en su contra. Casi simultáneamente en el Perú, el más alto tribunal constitucional archivó el caso contra Keiko Fujimori, anulando la acusación que se le había hecho de manera arbitraria. Ambos personajes han sido emblemas de la lucha por la libertad en sus países y estas decisiones fueron recibidas con enorme satisfacción por quienes defendemos el estado de derecho frente a los abusos políticos.

Álvaro Uribe: absolucón y nueva esperanza para Colombia

El presidente Uribe fue sentenciado en agosto de 2025—por una jueza de primera instancia—a 12 años de arresto domiciliario, por supuesta manipulación de testigos. Se trataba de la primera condena penal contra un exmandatario en la historia colombiana. Sin embargo, el 21 de octubre la Sala de Apelaciones de Bogotá revirtió ese fallo. El tribunal



concluyó que la sentencia tenía “deficiencias estructurales” y carecía de pruebas válidas para sustentar la culpabilidad. En consecuencia, Uribe fue absuelto de todos los delitos imputados.

El expresidente siempre defendió su inocencia, calificando el proceso como una “persecución política” y denunciando la parcialidad de varios sujetos procesales en las distintas instancias de la investigación. Sus abogados apelaron la sentencia, cuestionando la validez de las pruebas y ahora la justicia les ha dado la razón. Tras años de batalla legal, la absolución reivindica a Uribe, quien luego de conocer la decisión expresó: “He dicho la verdad a mis compatriotas a lo largo de esta extensa vida pública. Pido a la providencia energía y tranquilo discernimiento para trabajar por Colombia”. Así refleja su intención de seguir aportando activamente a la política de su país.

Más allá del plano legal, esta decisión tiene un impacto político, pues Uribe continúa siendo un referente fundamental en el escenario colombiano y latinoamericano. Su figura sale fortalecida, lista para seguir

“Uribe continúa siendo un referente fundamental en el escenario colombiano y latinoamericano. Su figura sale fortalecida, lista para seguir liderando el proyecto democrático...”

liderando el proyecto democrático que, durante sus dos mandatos, sacó al país de sus horas más oscuras al enfrentar con firmeza a los carteles del narcotráfico y a los grupos terroristas. No en vano, ha ocupado diversas posiciones en la administración pública, desde alcalde de su natal Medellín hasta presidente de Colombia, y es reconocido por su mano firme en defensa de la seguridad, la libertad y la legalidad. Hoy, liberado de acusaciones, puede dedicar su energía a esos mismos ideales que definen su legado.

Keiko Fujimori: caso cerrado y camino libre hacia la presidencia del Perú

Paralelamente, en el Perú la dirigente Keiko Fujimori obtuvo una victoria jurídica que despeja el camino para su

postulación presidencial. El 2 de octubre de 2025 el Tribunal Constitucional declaró fundado un hábeas corpus a su favor y anuló el “Caso Cócteles”, que la investigaba por presuntos aportes ilegales en las campañas de 2011 y 2016. La resolución “deja sin efecto toda investigación y la acusación” contra Fujimori y su partido, Fuerza Popular.

Los magistrados señalaron que la figura penal de “receptación patrimonial” se incorporó al Código Penal recién en noviembre de 2016, por lo que aplicarla a hechos anteriores es inconstitucional. También cuestionaron la acusación de organización criminal, subrayando que la finalidad de un partido político, ganar elecciones, no puede equipararse a un propósito delictivo. Para Keiko Fujimori, quien estuvo encarcelada preventiva e injustamente por 17 meses durante esta investigación, la decisión es una reivindicación luego de un proceso penal de más de una década.

Días después de anunciada esta resolución, Keiko Fujimori oficializó por todo lo alto en Trujillo, Perú, su candidatura presidencial para el 2026.



Su nombre es sinónimo de resiliencia política en nuestro continente. Ha llegado a la segunda vuelta en las tres elecciones a las que se ha postulado, siempre a escasos votos de obtener la presidencia. Su partido se ha mantenido como fuerza decisiva en el Congreso y continúa siendo uno de los principales y más sólidos grupos políticos del país. Gran parte del electorado peruano mantiene lealtad al fujimorismo porque lo asocia con estabilidad y firmeza. En medio de la inestabilidad y las pugnas entre poderes, Keiko Fujimori representa para muchos un factor de estabilidad y experiencia.

El triunfo del estado de derecho

Ambos casos, el de Uribe y el de Fujimori, presentan paralelismos claros. En los dos, la Justicia terminó corrigiendo abusos motivados por fines políticos. La contundencia de los fallos –absolución plena para Uribe y



anulación total para Keiko— envía un mensaje importante: los procesos penales deben reservarse para delitos reales, no para eliminar a adversarios electorales. De lo contrario, la justicia pierde credibilidad y se percibe como herramienta del poder.

Este no es un fenómeno aislado en el continente, ni único en América Latina. En Estados Unidos, el presidente Donald J. Trump, regresó de manera triunfal a la Casa Blanca a pesar de haber enfrentado múltiples procesos legales en su contra, motivados por razones claramente políticas. No solo el pueblo estadounidense no fue persuadido por esos ataques politizados, sino que los identificó de inmediato como una instrumentalización del sistema judicial para frenarlo electoralmente. Sucedió lo contrario: Donald J. Trump obtuvo aun mayor respaldo que en su primera elección.

Estoy convencido de que, igual que sucedió con el presidente Trump, tanto Uribe como Fujimori fortalecerán sus perfiles de líderes tenaces y comprometidos con sus pueblos. Álvaro Uribe y Keiko Fujimori han demostrado ser luchadores incansables por la democracia, la libertad, la seguridad, el progreso y el orden institucional. Sus trayectorias reflejan la defensa de valores republicanos fundamentales. Sus victorias judiciales no solo reivindican sus nombres, sino que fortalecen la confianza en que la justicia imparcial es posible incluso frente a vendavales políticos. La absolución de Uribe y la exoneración de Fujimori son buenas noticias para el estado de derecho y la democracia hemisférica.

“El presidente Trump, regresó de manera triunfal a la Casa Blanca a pesar de haber enfrentado múltiples procesos legales en su contra, motivados por razones claramente políticas...”

Editorial

Julián Obiglio

Coordinador General Revista AGENDA
Presidente Fundación Nuevas Generaciones, Argentina



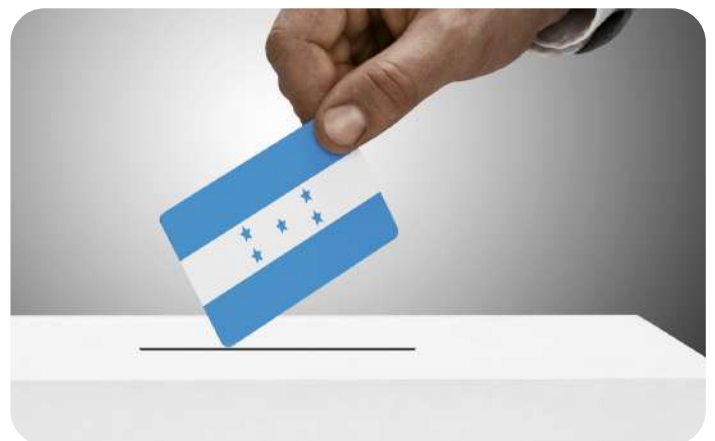
¡Grandes expectativas políticas para un fin de año sin descanso!

Se acerca el final de 2025 y los hitos políticos que tenemos por delante nos mantendrán alertas hasta el mismo 31 de diciembre. Hace pocos días hemos tenido una gran sorpresa con Argentina: el presidente Javier Milei recibió un rotundo apoyo de la administración de Donald Trump y, tal vez como consecuencia de ello, obtuvo un respaldo electoral social que muy pocos imaginaban, quedando al borde de las mayorías parlamentarias y abriendo un nuevo camino de diálogos y acuerdos que el presidente argentino, hasta ahora, no se había mostrado dispuesto a recorrer.

Pero repasemos lo que tenemos en agenda para el último mes del año:

Honduras

El domingo 30 de noviembre se realizaron las elecciones presidenciales y legislativas en Honduras, donde está en juego el regreso de la derecha al poder. Los resultados definitivos todavía no se han obtenido, pero el Partido Nacional de Honduras es el favorito, llevando como candidato a Nasry Asfura –empresario nacido en Tegucigalpa, de ascendencia palestina, conocido como “Papi a la orden”–.



“En Honduras todo se resuelve en la primera vuelta. Con esta elección sabremos si se produce un cambio de orientación o si el país continúa sumergido en el populismo caribeño”.

Por otro lado, la izquierda, supuestamente opositora al régimen, ha llevado como candidato a Salvador Nasralla, quien hasta hace pocos meses ocupó la vicepresidencia bajo el mandato de Xiomara Castro.

Lo único que parece claro, es que se termina el régimen de Zelaya-Castro, que lleva como candidata a Rixi Moncada.

En Honduras todo se resuelve en la primera vuelta, por lo con esta elección sabremos si se produce un cambio de administración y orientación o si el país continúa sumergido en el populismo caribeño.

El conteo sigue abierto y resta esperar para tener una definición respecto del

ganador y su fortaleza o debilidad, según la diferencia de votos que lo consagre.

Chile

Pocos días después de Honduras, el 14 de diciembre, tendremos la segunda vuelta presidencia en Chile, en la cual la derecha se encuentra muy bien perfilada para triunfar sobre la propuesta de la izquierda, que encabeza el partido comunista. El candidato del partido “Republicanos”, José Antonio Kast, fue el que resultó más votado de los restantes partidos de la derecha y la centro derecha. Por lo que se presume que la mayoría de los chilenos que en primera vuelta votaron alternativas distintas al gobierno comunista, acompañarán ahora su propuesta electoral.

Aquí tendremos varios temas para seguir de cerca. El primero de ellos es el comportamiento de los partidos que llevaron otra propuesta de derecha. Ellos son Johannes Kaiser (derecha dura) y Evelyn Matthei (centro derecha). Ambos han apoyado abiertamente a Kast, por lo



que se presume que sus electores lo acompañarán en la segunda vuelta. Por otro lado, no está claro qué harán los electores de Franco Parisi, que llevó una propuesta más ligada a la queja o al antisistema. Es probable que ellos se distribuyan entre los dos candidatos que participan de la segunda vuelta.

Más allá de esto, hay dos cuestiones que parecen claras: los resultados legislativos de la primera vuelta ya nos marcan una mayoría importante de la derecha, representada por diversos partidos, en el Congreso. Con lo cual, allí ya se ha presentado un giro ideológico de importantes consecuencias. Y finalmente, pero ligado a ello, en caso de triunfar Kast, esa composición parlamentaria lo obligará a construir un gobierno de coalición estable, con representantes en su gabinete de los distintos partidos aliados. Ello implicará un

ejercicio de construcción conjunta y de búsqueda de consensos, que la derecha chilena todavía no ha logrado materializar.

Acuerdo Mercosur – UE

Todo apunta a que el 20 de diciembre de este año finalmente se firmará en Brasil el dilatado Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Para ello se precisa que el Parlamento Europeo apruebe por procedimiento de urgencia la cláusula de salvaguardia que estableció la Comisión para los productos agrícolas y posteriormente ratificó el Consejo de la UE.

De cumplirse con lo previsto, antes del 20 de diciembre el Consejo de la EU deberá aprobar el Acuerdo por mayoría calificada, para que luego su presidenta, Úrsula Von der Leyen, viaje a Brasil y pueda firmar el tratado con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en ejercicio de la presidencia pro tempore del bloque sudamericano. Luego de eso, comenzará su tratamiento en el Parlamento de la Unión Europea y en los parlamentos

locales de cada país, para su ratificación final y entrada en vigor.

Mientras tanto, veremos momentos de tensión en el Mercosur por el rechazo a la cláusula de salvaguardia agrícola incorporada luego del cierre de la negociación, y también del lado europeo, debido a los últimos intentos de rechazo de lo pocos países que se han manifestado contrarios al Acuerdo.

Lo relevante aquí es que estamos a las puertas de la firma del mayor acuerdo comercial del mundo, que potenciará el Triángulo Atlántico, la cooperación dentro de Occidente y la complementación comercial entre Sudamérica y Europa.

Venezuela

Hace pocos días la administración Trump ha designado de manera oficial al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional, apuntando directamente al líder del régimen, Nicolás Maduro, como su cabecilla. Esta decisión habilita la ampliación de sanciones legales y financieras contra funcionarios del

régimen y marca un giro drástico en la política estadounidense hacia Venezuela, al abrir la puerta a operaciones militares contra objetivos vinculados al chavismo.

Estados Unidos tiene importantes incentivos para terminar con el régimen de Maduro. No solo produce y envía drogas a su país y a la región, sino que además sirve como base operativa para enemigos de occidente, impulsa movilizaciones masivas de migrantes sin recursos y, entre otras cosas, pone en riesgo la zona de Guyana que posee relevantes reservas energéticas (en este número de Agenda incorporamos un artículo especial sobre ese tema).

“La administración Trump ha designado de manera oficial al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional, apuntando directamente al líder del régimen, Nicolás Maduro, como su cabecilla.”

La administración norteamericana tiene desplegada una de sus flotas más importantes frente a las costas de Venezuela, cuyo mantenimiento diario cuesta una fortuna. Asimismo, ha recomendado a las aerolíneas dejar de transitar sobre espacio aéreo venezolano y sugerido a las representaciones extranjeras dejar el país. Todo ello mientras bombardea lanchas de narcos e interrumpe el paso de buques que no posean bandera aliada.

Es evidente que nos encontramos muy cerca de una intervención en el territorio venezolano, que buscará poner fin al régimen chavista y a la organización narco, para que el país comience un proceso de normalización democrática y legal en manos de las autoridades legítimamente electas. Eso será un terremoto en la región, que posiblemente impacte también en los regímenes de Cuba y Nicaragua, debilitando y deteriorando la sustentación de sus dictadores.

Acuerdo Ucrania-Rusia

Paralelamente a todo esto, la



administración estadounidense está impulsando con mucha fuerza la finalización del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Las negociaciones se desarrollan con mucha desconfianza por parte de Ucrania, puesto que las condiciones podrían implicar una importante concesión de su territorio, sin la garantía del establecimiento de una fuerza internacional, que garantice que Rusia no volverá a atacar su nación ni a reclamar otras porciones de tierra.

En dicha negociación se juega la paz de Europa, la capacidad de influencia del presidente Trump, y la estabilidad de gran parte del mundo occidental. El resultado que se alcance definirá una porción importante de la agenda europea del próximo año y abrirá un interrogante respecto del financiamiento para la reconstrucción de Ucrania.

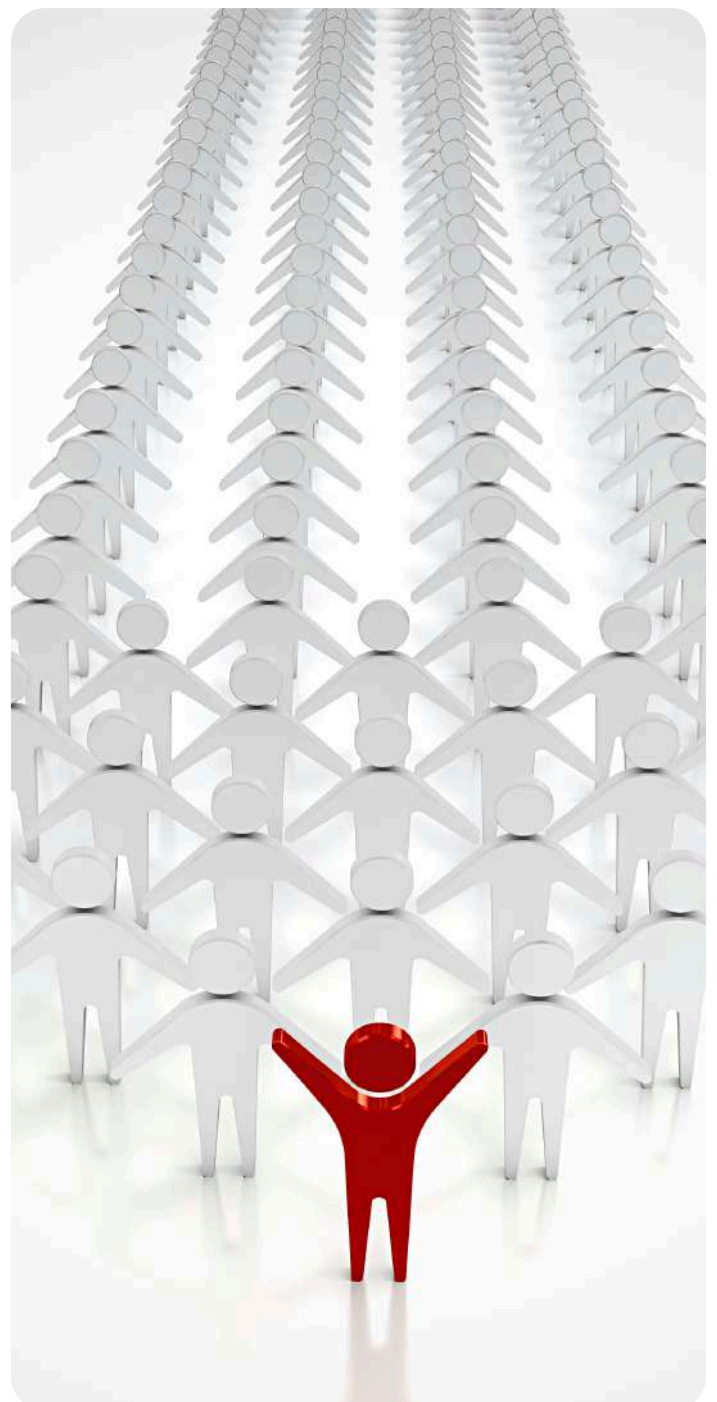
Elecciones presidenciales en Portugal, Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil

Superado esto, y alcanzado el primero de enero de 2026, ingresaremos en un potente período electoral en el mundo iberoamericano, que empezará con la elección del presidente de Portugal (ver artículo especial en esta edición de Agenda), y seguirá con Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil.

Todas elecciones relevantes y con grandes expectativas de que los líderes que serán electos en esos países ratifiquen (en el caso de Portugal) o impliquen un giro hacia la derecha. De producirse ese cambio, volveremos a una región iberoamericana orientada hacia la derecha, como hace varios años no veíamos.

Como podemos apreciar, la agenda política para diciembre de este año no tiene respiro y nos mantendrá atentos y vigilantes en cada minuto del mes. Sobre todas estas cuestiones y las perspectivas que estos

movimientos políticos presentan, trataremos en este nuevo número de **AGENDA**. La edición comienza con una imperdible nota de Carlos Díaz-Rosillo sobre los triunfos judiciales de Álvaro Uribe y Keiko Fujimori en Colombia y Perú, y sobre la ilícita utilización política de las herramientas judiciales. ¡No se la pierdan!



AGENDA

Revista

Es posible gracias a nuestros socios y aliados:

FIU

**Adam Smith Center
for Economic Freedom**

ng | Fundación
**Nuevas.
Generaciones**



CIUDADANÍA Y VALORES
FUNDACIÓN



PROEDUCA
SUMMA



CENTRO DE ESTUDIOS
PARA EL DESARROLLO



CENTRO DE ANÁLISIS
PARA POLÍTICAS PÚBLICAS



UNIVERSIDAD
FRANCISCO
MARROQUÍN
ESTUDIOS POLÍTICOS Y
RELACIONES
INTERNACIONALES



FUNDACIÓN JAIME GUZMÁN



REGIÓN VALPARAÍSO



**LATAM
CONNECTION**
Nonprofit corporation (FL-USA)



CIEPP
Centro de Investigación y
Estudio de Políticas Públicas



Andro Krstulović Opara

*Diputado de Croacia,
donde preside el Comité
de Asuntos Exteriores.
Exdiplomático y exalcalde
de Split.*



Croacia en el nuevo escenario de seguridad: responsabilidad, resiliencia y patriotismo

Europa ya no es un espacio de paz garantizada. La guerra en Ucrania, la influencia híbrida rusa, el auge del populismo y la inestabilidad en su vecindario, recuerdan que la seguridad nunca puede darse por sentada. Croacia, consciente de su historia y de su ubicación estratégica, ha decidido reforzar su defensa y reintroducir el servicio militar obligatorio.

El autor nos explica los motivos políticos, estratégicos y morales de dicha decisión, en un contexto bélico muy preocupante para todo occidente.

“Croacia no olvida la agresión que sufrió, pero extrae de ella la determinación de no permitir jamás que su libertad vuelva a estar amenazada.”

La nueva realidad de seguridad en Europa

Europa enfrenta hoy su crisis de seguridad más grave desde el final de la Guerra Fría. La guerra en Ucrania, las amenazas híbridas y el resurgimiento de regímenes autoritarios están transformando el continente. Croacia ha respondido estratégicamente a estos cambios, reintroduciendo el servicio militar obligatorio e incrementando las inversiones en defensa, medidas impulsadas por la necesidad y no por gestos políticos. Nuestro país entiende que la paz no se preserva con pasividad, sino con responsabilidad, preparación y conocimiento.

Serbia, una fuente persistente de inestabilidad

La principal fuente de inestabilidad en el sureste de Europa sigue siendo

Serbia. Aunque formalmente candidata a la adhesión a la Unión Europea, su liderazgo autoritario se aleja cada vez más de los valores europeos, alineándose con el régimen de Vladimir Putin y promoviendo el llamado “Mundo Serbio”, su versión del “Mundo Ruso”: una reedición contemporánea de la ideología imperialista de la “Gran Serbia”.

El presidente Aleksandar Vučić controla los medios, domina las instituciones del Estado y recurre a una retórica nacionalista para ocultar el creciente descontento interno. El país vive protestas constantes, conflictos políticos y episodios de violencia, mientras que la esfera pública está inundada de propaganda. Serbia no ha condenado la agresión rusa contra Ucrania ni ha impuesto sanciones a Moscú. A través de medios estatales, se adoctrina a la



población para justificar la invasión rusa. Belgrado mantiene estrechos vínculos de seguridad con Moscú y Pekín, a la vez que dificulta el diálogo con sus vecinos.

Croacia, que recuerda con claridad la agresión serbia de los años 90, no puede ni debe ignorar este comportamiento en su entorno. No buscamos el conflicto, pero no olvidamos la historia. Aquella agresión nos enseñó que la libertad y la soberanía no tienen precio y solo se preservan con la voluntad y la capacidad de defenderlas.

La influencia maligna de Rusia y las amenazas al sureste de Europa

Rusia lleva años aprovechando estructuras de la Iglesia Ortodoxa, redes mediáticas y movimientos políticos para expandir su influencia en la región. Su objetivo es claro: debilitar a la Unión Europea y crear un cinturón de inestabilidad en su frontera sudoriental.

El caso más alarmante fue el intento de golpe de Estado en Montenegro

“La agresión nos enseñó que la libertad y la soberanía no tienen precio y solo se preservan con la voluntad y la capacidad de defenderlas.”

durante 2016, que involucró a agentes rusos y activistas locales pro-rusos. Su propósito era frenar el rumbo europeo del país. Elecciones posteriores llevaron al poder a partidos fuertemente ligados a la Iglesia Ortodoxa Serbia, que funciona como instrumento político tanto del “Mundo Ruso” como del “Mundo Serbio”. Hoy Montenegro, antes modelo de integración euroatlántica, corre el riesgo de convertirse en una “Bielorrusia balcánica”: un país formalmente democrático, pero bajo el peso de la influencia serbia y rusa.

Dinámicas similares se han visto en la República Srpska, en Bosnia y Herzegovina, donde su antiguo líder, Milorad Dodik, respaldado por Moscú, ha amenazado repetidamente con la secesión. La influencia rusa sigue siendo significativa en Georgia, a

través de canales religiosos, mediáticos y políticos. Mientras, Moldavia ha logrado resistir estas presiones y reafirmar su rumbo europeo en recientes elecciones. Estos casos confirman que la guerra híbrida no solo se libra con armas, sino también con desinformación y propaganda.

Hungría, Eslovaquia y los desafíos dentro de la Unión Europea

Incluso dentro de la Unión Europea crece la preocupación por el comportamiento de algunos Estados miembros. Hungría, bajo Viktor Orbán, se ha convertido en el principal defensor de Moscú en Bruselas. Orbán y su ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, emiten con frecuencia declaraciones agresivas hacia Croacia, especialmente en relación con el oleoducto croata JANA y cuestiones energéticas.

Un tono similar proviene ahora de Eslovaquia, tras el regreso al poder de Robert Fico. Aunque el país sigue formalmente dentro del marco euroatlántico, su retórica se asemeja

cada vez más a la de Hungría, creando espacio para la influencia rusa y debilitando la solidaridad europea. Las recientes elecciones en la República Checa y la probable llegada al Gobierno del populista Andrej Babiš también indican un posible alejamiento de su tradicional apoyo firme a Ucrania.

La estrategia de Croacia: seguridad, estabilidad y patriotismo

Croacia responde a los desafíos con acción. En línea con el programa SAFE (Seguridad y Defensa para Europa) y con las decisiones del Consejo Europeo, Croacia se ha comprometido a elevar el gasto en defensa al 5 % del PIB para 2030. La



modernización de las Fuerzas Armadas incluye el fortalecimiento de las capacidades terrestres, aéreas y navales, la mejora de la defensa aérea y cibernética, y la inversión en la industria de defensa nacional. Estas inversiones no solo implican un ejército más fuerte, sino también progreso tecnológico y resiliencia económica.

La reintroducción del servicio militar obligatorio también tiene una dimensión social. La mayoría de los jóvenes croatas apoya esta política, viéndola como una oportunidad para adquirir disciplina, habilidades prácticas y un sentido de servicio a la patria. Es la prueba de que el patriotismo en Croacia no es un vestigio del pasado, sino una expresión madura de responsabilidad hacia el futuro. Muchos padres apoyan que sus hijos presten servicio para fortalecerse y convertirse en hombres y padres responsables. Lo mismo ocurre con las jóvenes que se presentan como voluntarias, muchas de las cuales ya se han destacado como excelentes soldados y oficiales.

Croacia, un pilar de estabilidad y paz. Hoy Croacia es un miembro seguro, democrático y estable de la comunidad euroatlántica, así como . un centro regional en turismo, economía y energía. Los indicadores muestran de manera constante que, junto con Eslovenia e Islandia, Croacia se encuentra entre los países más seguros de Europa. La seguridad, la estabilidad y la paz son el `petróleo nacional´ croata. Invertir en este `recurso´ es nuestro mayor interés estratégico. Nuestra prioridad es un vecindario pacífico, estable y próspero

Croacia apoya activamente el desarrollo democrático de los países de los Balcanes Occidentales, los asiste en su proceso de integración europea y promueve la cooperación basada en el buen vecindario y el

“Croacia apoya activamente el desarrollo democrático de los países de los Balcanes Occidentales, los asiste en su proceso de integración europea...”

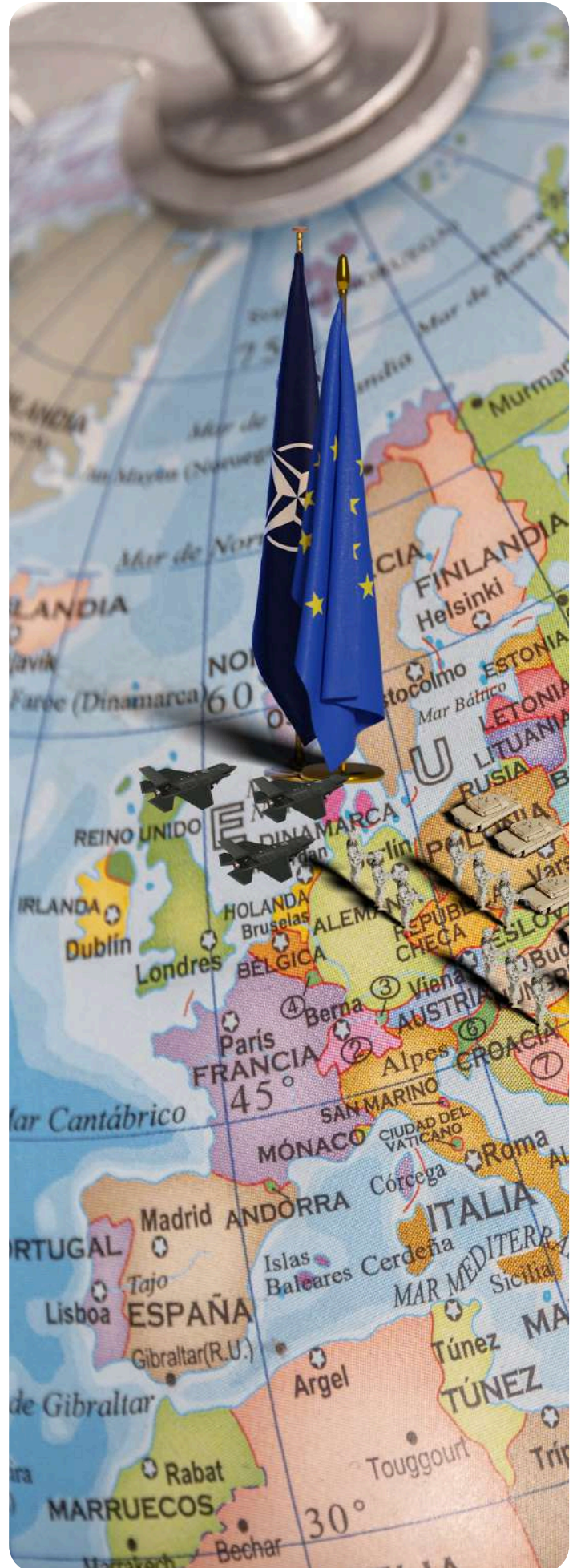
respeto mutuo.

Conclusión

El aumento de la inversión en defensa, la modernización de las Fuerzas Armadas, la estrecha cooperación con los aliados de la OTAN y la reintroducción de la formación militar conforman la piedra angular de la doctrina de seguridad de Croacia.

En un mundo donde los valores de libertad y responsabilidad vuelven a ser puestos a prueba, Croacia sigue siendo un aliado firme de la comunidad euroatlántica y un defensor confiable de su identidad cristiana y de su forma de vida europea. Ese compromiso solo es posible cuando existen tanto la voluntad como la capacidad para defender esos valores.

“Croacia sigue siendo un aliado firme de la comunidad euroatlántica y un defensor confiable de su forma de vida europea...”





Luis Fernando Galarreta Velarde

Abogado, empresario y político peruano. Es miembro del Parlamento Andino para el periodo 2021-2026. Fue congresista de la República del Perú durante tres periodos y presidente del Congreso entre 2017-2018. Es secretario general nacional del Partido Fuerza Popular.



El retorno de la bicameralidad en el Perú: un paso hacia la madurez institucional

En marzo de 2024 el Parlamento Peruano aprobó una modificación constitucional para que se regrese a una estructura bicameral, ya que desde 1994 había dejado de tener Cámara de Diputados y Senado para pasar a un parlamento unicameral. En 2026, se volverán a elegir diputados y senadores.

Aquí se analizan los motivos por los que una mayoría calificada en el parlamento impulsó la reforma y el posible impacto que esto tendrá en el funcionamiento de las instituciones representativas y políticas del país.

El Perú ha dado un giro relevante en su historia política. Después de más de tres décadas de un Congreso unicameral, el país decidió recuperar una fórmula que fue parte esencial de su tradición republicana: la bicameralidad. Con la promulgación de la Ley 31988, en marzo de 2024, se restablecen el Senado y la Cámara de Diputados, configurando un nuevo equilibrio en la estructura del Poder Legislativo que entrará en vigor a partir de las elecciones generales de 2026.

El retorno a la bicameralidad no fue un trámite menor; supuso una reforma constitucional que requería el voto calificado de dos tercios del Congreso, es decir, 87 de los 130 legisladores. Alcanzar ese consenso, en un parlamento fragmentado y marcado por la confrontación política, fue un logro que revela una voluntad de reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza ciudadana en la política. En este proceso, Fuerza Popular, principal bancada con 24 escaños, tuvo un papel central.

Bajo el liderazgo de Keiko Fujimori, dicho partido ha sido defensor constante de la Constitución de 1993 y

ha mantenido una línea de coherencia: preservar el marco económico que dio estabilidad al país y, al mismo tiempo, reconocer que el modelo unicameral cumplió su ciclo histórico. La Constitución del 93 fue hija de un tiempo de emergencia: el terrorismo avanzaba, la hiperinflación destruía el ahorro nacional y el Estado se encontraba al borde del colapso. En ese contexto, la unicameralidad fue una herramienta de eficacia legislativa, necesaria para aprobar con rapidez las reformas estructurales que modernizaron el país.

El debate dentro del partido Fuerza Popular ha sido extenso y profundo. Desde la bancada del 2016, que en su momento integré y optó por no dar el paso a la bicameralidad, hasta nuestro actual grupo parlamentario, la realidad ha ido cambiando... también la posición respecto de la conveniencia y necesidad de la reforma.



Consideramos que gracias a esa estructura ágil de la unicameralidad, el Perú pudo aprobar nuevas leyes orgánicas, crear organismos reguladores, reformar los códigos Civil y Penal y consolidar un sistema económico abierto al mercado que, pese a sus altibajos, sentó las bases del crecimiento sostenido de las últimas tres décadas. La unicameralidad cumplió con éxito la misión de reconstruir el Estado y devolverle rumbo a la nación. Sin embargo, el contexto actual es otro.

Perú no vive ya bajo la urgencia del conflicto interno, sino bajo la fatiga de una inestabilidad política persistente. En los últimos nueve años, el país ha tenido ocho presidentes, un hecho que refleja con crudeza la fragilidad institucional y la urgencia de fortalecer los contrapesos del poder. La sobreproducción legislativa, la falta de análisis técnico y la improvisación en la aprobación de normas revelan la necesidad de un rediseño institucional. La bicameralidad responde a ese diagnóstico: busca fortalecer la deliberación, dotar de mayor peso político a las leyes y recuperar la calidad del debate parlamentario.

“Perú no vive ya bajo la urgencia del conflicto interno, sino bajo la fatiga de una inestabilidad política persistente.”

El nuevo esquema legislativo contempla 130 diputados elegidos por circunscripciones regionales y 60 senadores, mitad electos por representación nacional y mitad por regiones. Entre las funciones exclusivas del Senado figuran la ratificación de altos funcionarios del Estado, la aprobación de tratados internacionales y la participación en los juicios políticos. Su existencia no solo permitirá una revisión más rigurosa de las normas, sino que también aportará estabilidad y equilibrio institucional frente a las tensiones recurrentes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

La bicameralidad, además, puede contribuir a corregir una distorsión histórica: la concentración del poder político en Lima. Con un Senado de circunscripción nacional, se abre la posibilidad de una representación más equitativa y federal, donde las regiones tengan voz propia en las grandes

decisiones del país.

Volver a la bicameralidad es, en definitiva, una decisión de Estado, no de coyuntura. No implica renunciar a los avances del pasado, sino actualizar el modelo institucional para los desafíos del presente. En un país que ha sufrido crisis recurrentes y fracturas políticas profundas, este retorno puede marcar el inicio de una etapa más madura, en la que el Congreso vuelva a ser un espacio de diálogo, de equilibrio y de visión de futuro. La existencia de un senado permitirá revalorizar la carrera parlamentaria, fomentar la especialización legislativa y generar una cultura política más responsable, basada en la meritocracia y el debate técnico. Solo con instituciones sólidas, el Perú podrá garantizar estabilidad económica, respeto al Estado de derecho y una democracia realmente funcional.

El tiempo dirá si la reforma logra su objetivo. Las elecciones de 2026 serán la primera prueba. Pero lo cierto es que Perú ha decidido mirar hacia adelante sin renunciar a su legado republicano. La bicameralidad, más que una nostalgia del pasado, puede ser la llave

para construir un parlamento más sólido, responsable y representativo: un instrumento al servicio de la estabilidad y del progreso nacional.





Roberto J. González

Es comisionado del condado de Miami-Dade (Florida), en representación de la zona de Grand West Kendall. Se desempeña como presidente del Comité de Seguridad y Salud.



No conviertan Miami-Dade en Nueva York

Luego del triunfo del candidato Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York -en representación del ala más izquierdista del Partido Demócrata- muchos desconfían de que pueda lograr una gestión exitosa, que cumpla con las poco realistas promesas que realizó en su campaña.

En el presente artículo, el comisionado González analiza las consecuencias que este resultado podría tener para la ciudad de Nueva York y sostiene por qué motivo esto nunca debería sucederle a su condado, donde viven personas que han escapado de los horrores del socialismo, del estatismo y del comunismo.

El reciente triunfo de Zohran Mamdani en las elecciones por la alcaldía de la ciudad de Nueva York representa más que un cambio local: se lee como una repetición del manual socialista-populista utilizado por Fidel Castro, Hugo Chávez y Cristina Fernández de Kirchner. Estos líderes construyeron revoluciones o elecciones basadas en infladas promesas de igualdad obligatoria y en la criminalización de un segmento de la población.

Sus características incluyen economías y monedas colapsadas, expropiación de propiedades, violaciones a los derechos humanos, pérdida de igualdad ante la ley, aislamiento social y político, y un alto número de muertos y refugiados. Sus fracasos están bien documentados. Lo que está por escribirse es cómo Mamdani podría llevar al colapso a la otrora gran ciudad de Nueva York.

Cuando ese colapso comience, las repercusiones llegarán a Florida, especialmente aquí, en el condado de Miami-Dade. Florida es el nuevo

estado de Nueva York y Miami-Dade su área metropolitana más grande, la nueva ciudad de Nueva York. Se pueden debatir las diferencias y similitudes todo el día, pero hay algo que no se puede negar: la población de nuestro condado está compuesta en gran medida por personas que han probado el amargo fruto del socialismo, mientras que muchos neoyorquinos mantienen un idealizado y casi infantil romanticismo sobre los beneficios del socialismo, que nunca se han concretado.

Nuestra experiencia importa. Puedes ir a una panadería en Little Havana y un hombre te contará, mientras toma un cafecito, cómo los soldados de a pie de la brutal dictadura de Castro, cegados por la ideología, expropiaron su iglesia católica o su escuela y cómo



su sobrino fue encarcelado y torturado por disenter. O puedes ir a Doral y, mientras compartes unos tequeños, una mujer venezolana te contará cómo los matones revolucionarios chavistas intimidaban a los propietarios de viviendas o expulsaban a las personas de pequeños negocios, que luego eran entregados a funcionarios del gobierno o a ocupantes ilegales. El presidente argentino Javier Milei aún denuncia los privilegios de una clase política intocable cuyos aumentos decretados por gobiernos pasados provocaron hiperinflación.

En el condado de Miami-Dade, el socialismo tuvo su oportunidad de juicio. Sus testigos fueron esas exposiciones de injusticia, esas manchas de lágrimas y sangre. El socialismo fue descrito, desacreditado y condenado como el virus del cuerpo y el alma que es. Esto se traduce en resultados políticos que sorprenderían a cualquier analista. Entre 2016 y 2024, los votantes nativos e inmigrantes de origen hispano en nuestro condado experimentaron un

“En el condado de Miami-Dade, el socialismo tuvo su oportunidad de juicio. Sus testigos fueron esas exposiciones de injusticia, esas manchas de lágrimas y sangre.”

cambio neto de casi 41 puntos hacia el Partido Republicano, un fenómeno denominado “efecto Trump/DeSantis”. Al mismo tiempo, la inscripción de republicanos en Florida ahora supera a la de demócratas, por aproximadamente 1,4 millones y ha ido aumentando de manera constante en los últimos años.

Los residentes del condado de Miami-Dade conocen demasiado bien el socialismo y lo consideran una palabra sucia; muchos neoyorquinos no. Con el debate sobre los refugiados de Nueva York que podrían llegar aquí, debemos decirles sin lugar a dudas: son bienvenidos, pero no traigan consigo la romantización del

socialismo al estilo de Castro, Chávez, Fernández de Kirchner o Mamdani. Las consecuencias son más graves de lo que pueden soportar. El destino actual para los refugiados políticos nacionales e internacionales que escapan del socialismo es el condado de Miami-Dade. Si llega aquí un flujo de recién inmigrados que olvidan los males del socialismo porque creen que “esta vez será diferente” y empiezan a votar por un socialismo light, seguiremos el mismo oscuro camino que Nueva York está a punto de emprender. Florida ya advierte que la migración descontrolada de refugiados ideológicos desde Nueva York podría sobrecargar los sistemas fiscales y sociales. El gobernador DeSantis ha planteado un “arancel” incluso para los trasplantes de personas que provienen de estados cuyas políticas chocan con las nuestras.

Las políticas familiares y favorables a los negocios de Florida, junto con un gobierno limitado que muestra superávits bajo el mandato de Ron DeSantis y otros, deben ser el modelo

para los estados. Miami-Dade, como el área metropolitana más grande de Florida, debería ser el modelo para otros condados similares en Estados Unidos en un futuro cercano. La combinación de fuerte libertad individual a nivel local, así como límites al alcance, costo y riesgos del gobierno, es lo que nos convierte en el principal destino para familias, capital y creación de empresas.

Cuando decimos “no conviertan Miami-Dade en Nueva York”, queremos decir que son bienvenidos, pero dejen atrás su fe infundada en el socialismo, incluso cuando esté bajo el rótulo de un gran partido político. El precio del socialismo es mucho mayor de lo que imaginan. Confíen en Miami-Dade cuando decimos que sabemos demasiado bien que Nueva York no está preparada para el socialismo por el que votó.





Francisco Millán Mon

Es licenciado en Derecho y diplomado en Estudios Internacionales. Desde 2004 es diputado en el Parlamento Europeo, integrante del Grupo del Partido Popular Europeo.

A lo largo de su carrera diplomática ha ocupado distintos puestos de relevancia en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.



Europa y América Latina: socios naturales en un mundo cambiante

¿En qué estado se encuentran los diversos acuerdos comerciales de la Unión Europea con América Latina? ¿Cuándo finaliza su negociación y cuándo se ratificarán?

El autor, ponente del Acuerdo con Mercosur en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, repasa los diversos pactos comerciales en tratamiento entre la Unión Europea y el continente latinoamericano y pronostica un futuro positivo para dicha integración.

Finalmente, analiza la relevancia de una rápida ratificación de esos compromisos y reflexiona sobre la importancia del trabajo conjunto para contrarrestar el avance comercial de China en la región.

Para los europeos –y muy especialmente para un español–, América Latina es un subcontinente con el que tenemos en común innumerables vínculos históricos, políticos, económicos, culturales, lingüísticos y profundos lazos humanos. Como político gallego, soy muy consciente de esto. Ambas regiones compartimos además un compromiso con valores universales como la democracia, el respeto de los derechos humanos, la libertad y el Estado de derecho. Nos unen una visión del mundo y una forma de entenderlo. También coincidimos en la defensa de un orden internacional basado en normas. En resumen, somos socios naturales.

Hoy vivimos en un mundo cambiante en el que proliferan los conflictos, la incertidumbre en el plano económico y comercial y un creciente cuestionamiento de ese orden internacional. En este contexto, resulta fundamental para la Unión Europea (UE) fortalecer las relaciones con aquellos países que comparten nuestros principios, intereses y valores,

para afrontar juntos los numerosos desafíos globales y birregionales. En este sentido, dar un salto cualitativo en el diálogo político y la cooperación entre la UE y América Latina es muy oportuno y necesario.

En estas últimas décadas ambas regiones consolidaron su relación a través de un conjunto de convenios: el Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y los Estados del Cariforum; el Acuerdo Comercial Multipartes entre la UE y Colombia, Perú y Ecuador o el Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, entre otros.

Recientemente se han dado avances trascendentales. En primer lugar, la actualización del pacto con Chile a través del Acuerdo Marco Avanzado, en aplicación provisional desde el 1º de junio de 2025. Asimismo, en enero de



2025 concluyeron las negociaciones para la modernización del importante Acuerdo Global entre la UE y México. Por otra parte, en diciembre de 2024 culminaron –tras más de veinticinco largos años– las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE - Mercosur.

Como ponente del Acuerdo con Mercosur en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, me detengo brevemente en él. Quiero subrayar que se trata del tratado más relevante que la UE ha negociado en toda su historia, tanto por su tamaño –comprende a más de 750 millones de ciudadanos– como por su impacto económico y relevancia geopolítica. Este convenio es una gran apuesta geoestratégica. Las estructuras institucionales que recoge reforzarán lazos políticos y de cooperación. Asimismo, nos permitirá ampliar y diversificar nuestras relaciones económicas y comerciales e incrementar todavía más las inversiones, así como fortalecer la seguridad económica mediante flujos fiables y sostenibles de materias

“El Acuerdo con Mercosur se trata del tratado más relevante que la UE ha negociado en toda su historia, tanto por su tamaño como por su impacto económico y relevancia geopolítica.”

primas fundamentales –tan importantes para la transición ecológica y digital en la que las dos regiones estamos inmersas–. Además, el tratado contribuirá a contrarrestar la creciente presencia de otros actores en la región, como China, que ya es el primer socio comercial de América del Sur.

El pasado 3 de septiembre la Comisión Europea remitió el Acuerdo con Mercosur y el Acuerdo con México al Consejo de la UE y al Parlamento. Esto permitiría sus firmas próximamente.

Por otra parte, a inicios de noviembre se celebró la Cumbre UE - CELAC en

“La democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho debe constituir un pilar fundamental de nuestra relación birregional.”

Santa Marta, Colombia. Respecto de este tipo de encuentros, quiero destacar tres cuestiones clave para la relación birregional. En primer lugar, la necesidad de poner el foco en los desafíos compartidos en materia de seguridad. El crimen organizado, y en especial el narcotráfico, afecta muy gravemente a ambas regiones. Existen mecanismos útiles de cooperación que deben incrementar su efectividad. También es precisa una coordinación muy estrecha entre los puertos de ambos lados del Atlántico, esenciales para el tráfico de cocaína. Espero que la Alianza para la Seguridad Ciudadana aprobada en Santa Marta resulte eficaz.

En segundo lugar, la promoción de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho debe constituir

un pilar fundamental de nuestra relación birregional. Nicaragua, Venezuela y Cuba se encuentran entre los regímenes más autoritarios del mundo. Las cumbres de la UE - CELAC deben denunciar de manera clara en cada encuentro las situaciones de violaciones graves del Estado de derecho y de los derechos humanos que existan.

En tercer lugar, es fundamental que en dichas reuniones se reafirme la defensa del orden internacional basado en normas y en el multilateralismo, y se exprese la condena inequívoca de la guerra, especialmente la causada por la injustificada e ilegal invasión rusa de



Ucrania. Hay que dejar de lado la tibieza y decir las cosas como son.

En conclusión, en el mundo de hoy, tan fragmentado, complejo e imprevisible, el refuerzo de la relación entre estas dos regiones hermanas - que comparten muchos valores e intereses - es más necesario que nunca. Espero que en fechas muy próximas tendremos la gran oportunidad de firmar el convenio UE - Mercosur y, después, el acuerdo UE - México, previsiblemente en febrero 2026. Ambos contribuirán poderosamente a fortalecer los lazos birregionales.

“Es fundamental que se reafirme la defensa del orden internacional basado en normas y en el multilateralismo, y se exprese la condena inequívoca de la guerra, especialmente la causada por la invasión rusa de Ucrania.”





Federico Pinedo

Sherpa argentino en el G20. Ha sido diputado de la nación en tres períodos y senador. Ha presidido el Senado de la República Argentina.



Triunfó Milei

Luego de las elecciones parlamentarias de medio término en Argentina, el autor analiza los motivos por los cuáles la fuerza política del presidente Javier Milei obtuvo un destacado resultado que ha potenciado su gobierno y sus planes reformistas.

Asimismo, se analizan aquí los elementos previos a dicha elección; esos que mostraban a la administración de Milei en una compleja situación, que finalmente requirió un importante auxilio del gobierno de Estados Unidos.

Las elecciones, como su nombre lo indica, suceden entre dos o más alternativas. Para entenderlas no solamente hay que analizar a la opción que ganó, sino también a la que perdió. En el caso argentino, hace tres meses todo indicaba que el presidente ganaría la elección de medio término para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, por una gran diferencia. En lo económico había enfrentado una situación caótica generada por sus adversarios. Kirchner con sus aliados –como Sergio Massa– había emitido billetes por 13% del producto y generado un déficit de 5% del producto en el Tesoro y 10% del producto en el Banco Central; la inflación corría al 20% mensual. En un año y medio Milei eliminó ambos déficits y bajó la inflación al 25% anual.

En materia de seguridad, atacó el narcotráfico con resultados visibles y recuperó el orden en las calles. En el campo social, eliminó la intermediación política que se llevaba

“Hace tres meses todo indicaba que el presidente ganaría la elección de medio término para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, por una gran diferencia.”

una parte de la ayuda social y duplicó ciertas prestaciones para los más necesitados.

Entonces, la oposición kirchnerista decidió atacarlo, no por lo que estaba mal sino por lo que había hecho bien. Así sumó a otros opositores moderados para crear por medio del Congreso una serie de gastos impagables en temas sensibles –jubilaciones, personas con discapacidad, hospitales– que romperían el equilibrio fiscal. Milei lo resistió con vetos y decisión. Al mismo tiempo, los opositores fueron buenos en generar una sensación de pánico que provocó una corrida sobre el

precio de la moneda nacional, diciendo que su valor era insostenible. Muchos especuladores pensaron que eso era real, por la baja reputación financiera argentina.

En esa situación, el kirchnerismo ganó una elección local en la provincia de Buenos Aires, que representa el 37% del electorado nacional, por 14 puntos de diferencia. Paradójicamente, el momento del triunfo marcó el inicio del declive opositor. Millones de argentinos recordaron con miedo y frustración el retorno del populismo de izquierda irresponsable. Todos los sacrificios para terminar con la inflación y recuperar el orden, todo el futuro de los propios hijos, pasaba a estar nuevamente en peligro. Así se entiende el triunfo nacional alcanzado por la fuerza de Milei apenas un mes y medio después de dicha elección local.

Milei sabía que el ataque a la moneda argentina tenía un altísimo componente político y se propuso eliminar esa percepción con ayuda exterior, que pudo negociar con el



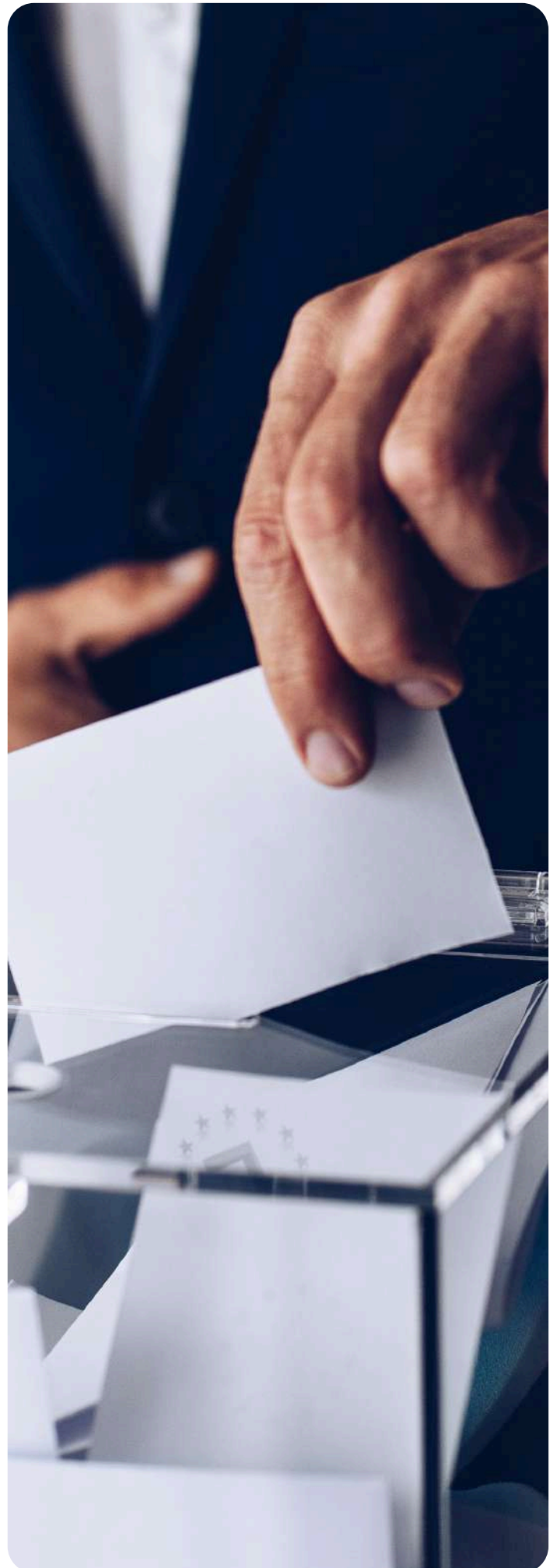
Departamento del Tesoro norteamericano, gracias a sus posiciones internacionales prooccidentales y proisraelíes.

Durante la campaña, los opositores de todo pelaje –de izquierda, pero también de derecha– sostenían que la *corrida* no era riesgo político sino quiebra del programa económico. Sin embargo, al día siguiente de la victoria de Milei, los bonos argentinos subieron más del 30% y el precio del dólar en pesos bajó de 1 520 a 1 465.

se es el porcentaje de riesgo político que había. Milei y sus equipos económicos y de política exterior, lo desarmaron.

Más del 40% de los argentinos tuvo memoria y se dio cuenta de la irresponsable opositora acción. Ganó Milei y ganó el cambio de rumbo en una Argentina que se dirige a la estabilidad y el crecimiento, dándole al mundo lo que necesita: alimentos, energía, minerales críticos, desarrollo de inteligencia artificial, servicios basados en el conocimiento y el turismo. Todos esos son mercados globales, aptos para dejar atrás la vieja economía cerrada que tanto mal causó al país.

“Más del 40% de los argentinos tuvo memoria y se dio cuenta de la irresponsable opositora acción. Ganó Milei y ganó el cambio de rumbo en una Argentina que se dirige a la estabilidad y el crecimiento...”





Pablo Hispan Iglesias de Ussel

*Presidente del Grupo del
Partido Popular Europeo
en la Asamblea
Parlamentaria del
Consejo de Europa.
Es diputado por el
Partido Popular en la
cámara baja española.*



El Consejo de Europa y el futuro de la democracia

¿Qué es el Consejo de Europa y qué roles cumple? ¿Cuáles son las batallas que dicho organismo está librando? ¿Qué desafíos presenta ese continente y cuáles son las perspectivas para el Estado de derecho?

A todos estos interrogantes responde un actor central en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que tiene la responsabilidad de presidir el grupo político mayoritario en esa institución.

Uno de los momentos estelares en la historia de occidente se produjo en 1989, con la caída del muro de Berlín, como símbolo de la victoria en la guerra fría. Los jóvenes jubilosos sobre el muro que había dividido esa ciudad fueron una potente imagen de éxito. Ronald Reagan y su política asertiva respecto a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y el triunfo social de la economía de libre mercado, fueron sin duda alguna de las causas que permitieron alcanzar ese objetivo. También lo fue el poderoso efecto de atracción que ejercía la democracia de las naciones del oeste de Europa. Algunas democracias habían dado pasos hacia el fortalecimiento de su Estado de derecho a través de la puesta en marcha del Consejo de Europa, uno de cuyos padres fundadores había sido Winston Churchill.

El Consejo ha sido una unión de democracias que se dieron a sí mismas unos ambiciosos objetivos en la protección de los derechos y libertades plasmados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Eso.

incluyó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyas decisiones son de obligado cumplimiento para los Estados que se adhieran al mismo. A lo largo de las décadas, el Consejo ha sido la puerta de entrada para las naciones que salían de regímenes dictatoriales, hacia el club de las democracias. Primero las del sur de Europa y luego las del este, los Balcanes y el Cáucaso.

En el Consejo, formado hoy por 46 naciones, se fijaron las fronteras políticas del continente, y una de sus principales tareas ha sido llevar a cabo un exhaustivo examen de las instituciones de los Estados que lo conforman. Eso ha resultado de extraordinario valor especialmente para aquellas que pretendían



incorporarse a la Unión Europea. Al mismo tiempo, toda vez que una democracia sólida requiere pluralidad de partidos políticos, jueces y tribunales independientes, y medios de comunicación activos—además de elecciones periódicas—, el Consejo ha prestado especial atención a dichas cuestiones, generando instrumentos que promueven el fortalecimiento del Estado de derecho en cada país miembro.

En ese sentido, se constituyó el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), para paliar uno de los grandes males de cualquier democracia. Otro de los nuevos instrumentos es la Comisión de Venecia. Así como en el pasado la república veneciana fue símbolo de progreso económico y comercial, hoy es la sede del órgano del Consejo de Europa que asesora a diferentes democracias ante cambios legislativos o insuficiencias democráticas, fija los estándares en cuestiones clave para el estado de derecho y ayuda para garantizar la limpieza y transparencia en las elecciones democráticas. Un árbitro

“Toda vez que una democracia sólida requiere pluralidad de partidos políticos, jueces y tribunales independientes, el Consejo ha generado instrumentos que promueven el fortalecimiento del Estado de derecho en cada país miembro.”

imparcial en tiempos de polarización.

La Comisión de Venecia, mantiene el espíritu de la vieja república del adriático, ampliando sus fronteras y mirando más allá. Por eso son numerosas las naciones latinoamericanas que forman parte de ella. En el mismo sentido, poco a poco el Consejo ha ido ampliando el ámbito de sus relaciones internacionales. De hecho, en 2024, la galardonada con el principal reconocimiento que otorga el Consejo a quienes trabajan a favor de la democracia y los derechos humanos—el Premio Vaclav Havel— fue la venezolana María Corina

Machado.

El corazón del Consejo es su Asamblea Parlamentaria, en cuyas sesiones plenarias se celebran amplios y pormenorizados debates sobre los principales desafíos del continente europeo, donde naciones americanas como México y Canadá son observadores y sus representantes políticos hacen oír su voz. Por supuesto, desde el año 2022 la Asamblea ha prestado una atención singular a la situación de Ucrania, y una de las últimas iniciativas del Consejo ha sido la puesta en marcha de un tribunal para juzgar el crimen de agresión sufrido por ese país.

Hoy el Consejo de Europa transita por las mismas dificultades que las democracias que lo componen. Entre ellas, la polarización de los populismos, la transgresión de los límites institucionales por parte de algunos gobernantes y la injerencia rusa en todas las naciones del continente. Da la sensación de que el Estado de derecho está sufriendo de fatiga en los materiales que lo

conforman y que los estándares que nos dimos en el pasado son un lastre demasiado exigente ante los desafíos actuales. A pesar de ese aparente cansancio, no hay mejor sistema que la democracia para organizar la vida en común. Por ello no hay mayor acierto que preservarla, cuidarla y fortalecerla, promover sus valores y hacer más sólidos sus principios. Porque fuimos democracias ganamos en 1989 y solo siendo democracias volveremos a triunfar ante los nuevos desafíos que hoy nos toca afrontar.

Por esa razón, el Consejo de Europa va a seguir siendo el foro donde las democracias europeas debatan y dialoguen sobre los problemas y retos de nuestro sistema. Y lo hará, cada vez más, con la mano tendida al continente americano. Porque la democracia, la libertad y el Estado de derecho son la llama que desde occidente sigue iluminando al resto de naciones.





Paulo Neves

*Diputado de la
República Portuguesa.
Presidente del Instituto
para la Promoción de
América Latina y el
Caribe (IPDAL).*



Portugal: resultados de las elecciones municipales y su posible impacto en las presidenciales

Las elecciones parlamentarias de mayo - como consecuencia de las cuáles se eligió al primer ministro - y las municipales de octubre de este año, han otorgado a la derecha una representación mayoritaria en Portugal. Las elecciones presidenciales, previstas para enero del próximo año, podrían ofrecer un contrapeso al parlamento y al gobierno, o consolidar la reconfiguración política total del país.

El autor del presente artículo, relevante miembro del Parlamento Portugués por el tradicional partido de derecha PSD, actualmente en gobierno, analiza la situación política de su país.

Portugal atraviesa un período de reconfiguración. Por lo general, tres elecciones en el plazo de un año provocan inestabilidad política, fatiga electoral e –incluso– fluctuación económica y financiera. Sin embargo, este no ha sido el caso, ya que el gobernante Partido Social Demócrata (PSD) ha salido reforzado de las dos elecciones celebradas hasta ahora: legislativas - como consecuencia de las cuáles se eligió al primer ministro - y municipales. A pesar del marco electoral, la economía se encuentra en un período de estabilidad y crecimiento, y en enero del 2026 se celebrarán las elecciones presidenciales.

La economía portuguesa, según el Presupuesto del Estado para 2026, prevé un crecimiento del PIB del 2,3 %, superior al 2 % estimado para este año. El Gobierno anticipa además un superávit presupuestario del 0,1 %, sustentado en un saldo primario del 2,1 %, una desaceleración de la inflación, y una reducción de la deuda pública al 87,8 % del PIB. También se

proyecta una bajada de la presión fiscal al 34,7 % y del desempleo al 6 % en 2026. Estos indicadores han llevado a las principales agencias internacionales a mejorar la calificación de Portugal, reflejando una mayor estabilidad y credibilidad financiera.

Políticamente, el país se presenta estable a pesar de la disolución del Parlamento realizada a principios de 2025, que dio lugar a elecciones legislativas adelantadas en mayo. En esos comicios, el partido gobernante fue reelegido, renovando la confianza de una mayoría relativa de los portugueses y consolidando su



posición. Igual de importante resultó la significativa caída electoral del Partido Socialista (PS) –de centro-izquierda–, que pasó a ser la tercera fuerza política, y la notable irrupción de CHEGA! (CH, partido de derecha conservadora), que superó al PS y se convirtió en la segunda fuerza política. De este modo, se inicia una reconfiguración política a nivel nacional, en la que el Partido Social Demócrata pasa a ocupar el Gobierno de la Región Autónoma de las Azores y Madeira y el Gobierno de la República, al desbancar los diez años del Partido Socialista en el poder.

Esta reconfiguración política a nivel nacional también se reflejó a nivel local con las elecciones municipales que se celebraron en octubre de 2025. Lo importante de estos comicios, que se efectúan cada cuatro años, fue que sirvieron para reflejar las tendencias políticas nacionales y funcionaron como una prueba intermedia para los partidos gobernantes, configurando el panorama político nacional antes de las presidenciales

de 2026. Las municipales se saldaron con una victoria del PSD, que se impuso en los principales centros urbanos del país y aseguró el control de la Asociación Nacional de Municipios y la Asociación Nacional de Parroquias, ambas presididas por el Partido Socialista durante los últimos doce años.

El Partido Socialista, por su parte, tras un cambio de líder, logró resurgir, quedó en segundo lugar y restableció el equilibrio tradicional, ya que recuperó el terreno perdido frente al CHEGA!, que esperaba capitalizar su impulso en las elecciones legislativas, pero emergió como el gran perdedor de las elecciones, al obtener un resultado insignificante en las cámaras conquistadas.

“El Partido Socialista, por su parte, tras un cambio de líder, logró resurgir, quedó en segundo lugar y restableció el equilibrio tradicional...”

Los grupos más pequeños, como el Bloque de Izquierda (BE), el Partido Comunista Portugués (PCO) Iniciativa Liberal (L), Personas-Animales-Naturaleza, Livre (L, ecologista de izquierda) y CDS-PP (partido de derecha influenciado por la democracia cristiana), se presentaron en coalición con uno de los dos partidos tradicionales de gobierno, de acuerdo con sus divisiones ideológicas frente al otro, para tener representación a nivel local, sabiendo que, si se presentaban solos, tendrían menos representación.

Las elecciones presidenciales de enero de 2026 se perfilan como una disputa directa entre los candidatos de los partidos tradicionales de centro: PSD y PS y la candidatura independiente del almirante Gouveia e Melo, conocido por su eficacia en la gestión del proceso de vacunación contra la COVID-19 y por haber sido Jefe del Estado Mayor de la Armada.

Gouveia e Melo capta apoyos tanto de sectores moderados de ambos partidos como de electores



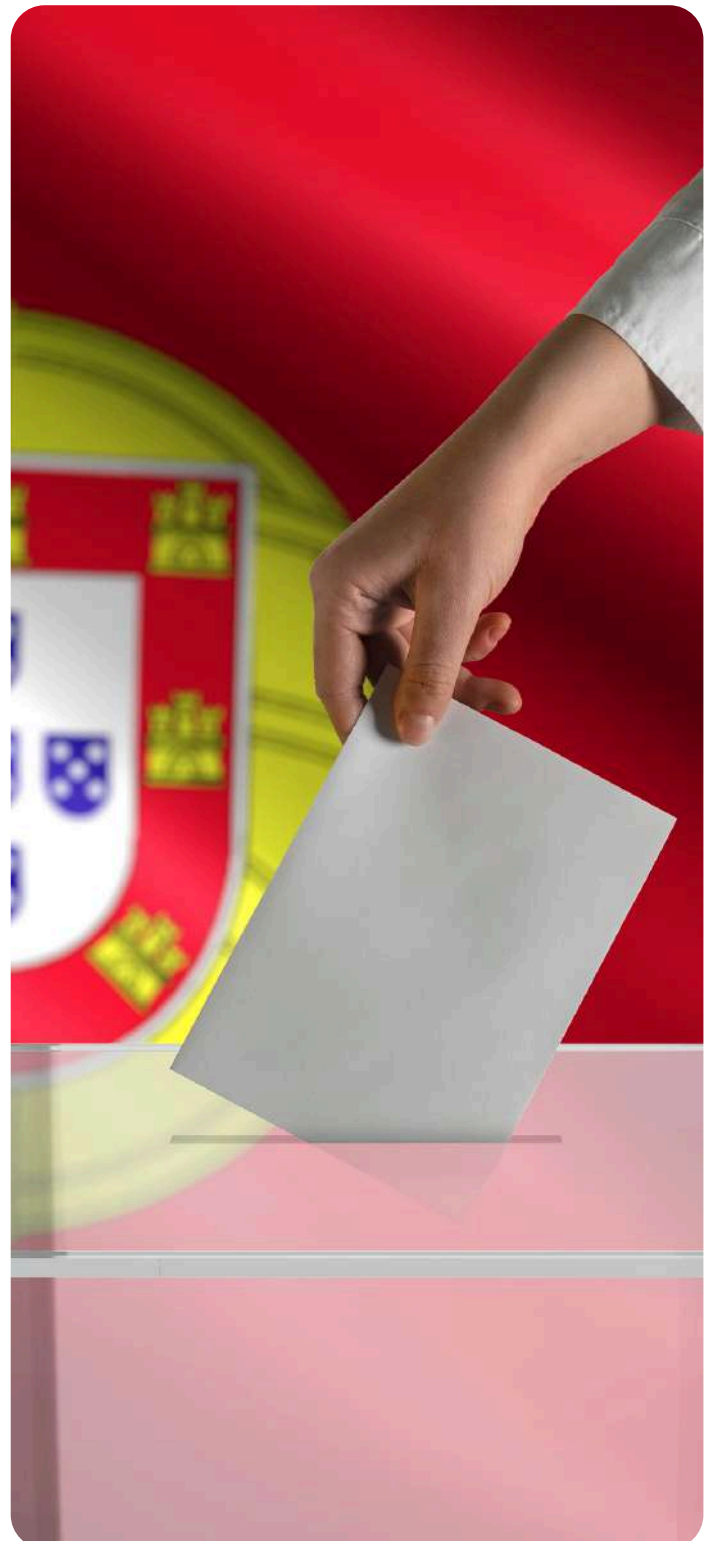
desvinculados de la política partidaria, lo que puede reducir significativamente la base electoral tradicional del PS y del PSD. Por su parte, el partido de derecha conservadora CHEGA!, debilitado tras las elecciones municipales y consciente de que solo su líder, André Ventura, mantiene suficiente notoriedad y apoyo a nivel nacional, decidió presentarlo como candidato. Algo similar ocurre con Iniciativa Liberal, que presentó al antiguo presidente del partido y actual eurodiputado como candidato.

En la izquierda, los partidos más pequeños (BE, PCP, L), que en las elecciones municipales intentaron unirse para aumentar sus posibilidades de representación, decidieron no converger en una candidatura única, fragmentando a los votantes de izquierda en los

distintos partidos de ese espectro político. Estos partidos más pequeños utilizarán estas elecciones para medir su fuerza y proyección en el contexto nacional. Dado el peso de las candidaturas presentadas, es difícil que las elecciones presidenciales se decidan en la primera vuelta, lo que dará lugar a un balotaje.

De este modo, las elecciones presidenciales de 2026 se perfilan como el momento decisivo para consolidar la actual reconfiguración política de Portugal. La eventual victoria del Partido Social Demócrata completaría un ciclo de reafirmación de la centroderecha en el poder, lo que se traduciría en un escenario de estabilidad política y continuidad gubernamental tras un año marcado por sucesivas citas electorales. Por el contrario, la victoria de otra fuerza política –ya sea el PS, en un intento por recuperar protagonismo, o una candidatura independiente como la del Almirante Gouveia e Melo– podría introducir un contrapeso institucional relevante, reequilibrando las dinámicas entre el Gobierno y la Presidencia de la República.

En cualquiera de los casos, Portugal demuestra una notable madurez democrática y resiliencia institucional, logrando preservar la estabilidad económica y la confianza internacional en un contexto político de intensa transformación.





Félix Maradiaga

Académico y activista político nicaragüense. Fue secretario general del Ministerio de Defensa durante la presidencia de Enrique Bolaños. Es codirector y fundador del Instituto de Liderazgo de la Sociedad Civil. Fue candidato presidencial en las elecciones generales nicaragüenses de 2021, pero en junio de ese año fue detenido en forma ilegal por el Gobierno de Daniel Ortega y permaneció 606 días en prisión.



La economía política del sometimiento: Represión Financiera y Patrimonial

La estrategia de los tiranos incluye lo que el autor de este artículo llama la “Represión Financiera y Patrimonial (RFPA)”, que busca eliminar a los opositores y convertir al ciudadano en rehén.

Maradiaga analiza los pasos que llevan adelante los dictadores para su aplicación, sus efectos y las medidas que los gobiernos, organizaciones intermedias y personas individuales pueden tomar para defenderse de dichos ataques.

Las tiranías empiezan amordazando –censura, hostigamiento judicial, asfixia económica– y, cuando se saben impunes –con jueces, banca y catastro bajo control–, atacan la propiedad privada, confiscan viviendas y empresas. La fase superior del silenciamiento es la Represión Financiera y Patrimonial (RFPA), una modalidad sofisticada de violación de los derechos de propiedad que pretende convertir al ciudadano en rehén. Los dictadores atacan las diversas formas de propiedad privada de opositores, intelectuales y disidentes porque allí habita lo íntimo y lo sagrado. La propiedad no es solo una cosa: es tiempo acumulado, proyecto de vida, soberanía individual. Por eso, quien pierde su propiedad pierde también parte de su voz.

La defensa de la propiedad privada pertenece al núcleo duro de las libertades: sin un ámbito propio de bienes no hay independencia moral ni responsabilidad civil. John Locke la entendió como prolongación de la persona; Frédéric Bastiat, como

escuela diaria de previsión y respeto por lo ajeno. Adam Smith, por su parte, sostenía que el primer deber del gobierno civil no es administrar botines, sino proteger vida, contratos y bienes mediante una justicia eficaz. Cuando ese respeto a la propiedad existe, florecen la cooperación y el mérito; cuando falta, se marchita no solo la riqueza, sino la dignidad, porque el ciudadano deja de ser autor de su destino.

Por eso el colectivismo –en todas sus declinaciones– recela de la propiedad y procura vaciarla. Allí donde se erosiona la paz jurídica a la que apelaba Adam Smith, el mercado libre degenera en una economía política del sometimiento. Si la expropiación es el rostro visible, su maquinaria íntima opera por capas técnicas que conviene ordenar. Por ello he introducido la “represión



financiera y patrimonial basada en activos” (RFPA) como concepto analítico y, a la vez, tipología operativa de sus mecanismos. Esta propuesta – publicada en el Journal of Democracy en noviembre de 2024– ofrece un lenguaje común que varias organizaciones de derechos humanos comienzan a adoptar en su monitoreo y litigio estratégico

La RFPA es el conjunto coordinado de instrumentos legales, regulatorios, judiciales, administrativos y parafiscales orientados a degradar, inmovilizar, transferir o anular derechos de propiedad y de disposición sobre el patrimonio de individuos y organizaciones disidentes, con fines de castigo, disuasión y cooptación. Su arquitectura opera por capas interdependientes:

- Activos tangibles: expropiaciones, “extinción de dominio” ad hoc, ocupaciones y alteración de folios catastrales y registrales.
- Activos financieros: congelamientos de cuentas, de banking selectivo y uso

“La defensa de la propiedad privada pertenece al núcleo duro de las libertades: sin un ámbito propio de bienes no hay independencia moral ni responsabilidad civil.”

- instrumental de normas ALD/CFT para bloquear transferencias e incautar saldos.
- Palancas monetarias y cambiarias: controles de capital, corralitos, múltiples tipos de cambio, devaluaciones inducidas e “impuesto inflacionario” como confiscación encubierta del ahorro.
- Gobernanza corporativa y cívica: intervención de juntas, administraciones forzosas, cancelación de personerías e inhabilitación de licencias.
- Información y privacidad patrimonial: explotación de bases de datos para doxxing fiscal, listas negras y denegación de certificaciones y títulos.
- Cautelares y foro: tribunales de

- excepción y forum shopping.
- Infraestructura de pagos.
- Estrangulamiento del financiamiento político y filantrópico.

Este repertorio tiene, además, un vector transnacional que consolida un apartheid financiero contra exiliados y diásporas críticas: notificaciones Rojas y asistencias jurídicas mutuas usadas de modo espurio para congelar activos y bloquear movilidad; listas de sanciones y screenings algorítmicos (incluidas bases de “riesgo reputacional” y listados de Personas Políticamente Expuestas) manipulados para negar onboarding bancario y cerrar cuentas. El resultado práctico es la ilegalización de la vida económica del disidente: no puede abrir una cuenta, alquilar un local, recibir donaciones ni pagar nóminas. No se trata de una anomalía local, sino de un patrón que atraviesa épocas y geografías: de Managua a Caracas, de La Habana a Harare y Moscú, y antes en la órbita soviética, la confiscación – abierta o “regulatoria” – ha servido

para domesticar a la ciudadanía y financiar a los leales.

¿Qué hacer, entonces? Convertir la defensa de la propiedad en política pública de la democracia, no en nota al pie. Eso implica anclar garantías anticonfiscación con reparación integral y debido proceso; blindar registros y catastros con trazabilidad pública y controles externos –incluida, donde sea pertinente, la certificación mediante registros distribuidos (blockchain)–; someter la lucha antilavado de activos o dinero y contra el financiamiento del terrorismo a



salvaguardas de libertad y restituir la neutralidad del dinero en la competencia política, de modo que donar a la oposición no sea una sentencia económica.

En el plano internacional, condicionar preferencias comerciales y financiamiento al respeto de la propiedad, sancionar personalmente a los confiscadores y perseguir el botín en jurisdicciones seguras.

Y, mientras tanto, en la sociedad civil: documentar títulos y abusos, diversificar canales de financiamiento y resguardo del ahorro—incluidas reservas digitales de valor como Bitcoin—, y apoyar redes de asesoría patrimonial y litigio estratégico. Porque una república digna se reconoce en un hecho sencillo: donde nadie puede tocar impunemente lo tuyo, nadie puede comprar tu silencio

“Una república digna se reconoce en un hecho sencillo: donde nadie puede tocar impunemente lo tuyo.”





Aparicio Caicedo

Es profesor de Filosofía de la Naturaleza Humana en la Universidad de las Américas, Ecuador. Autor del libro "El New Deal del Comercio Global". Ha sido consejero del presidente Guillermo Lasso.



El correísmo perdurará mientras sobreviva su Constitución

El reciente rechazo a la consulta popular impulsada por el presidente Noboa en Ecuador, nos invita a preguntarnos qué sucederá en dicho país, que todavía mantiene una fuerte impronta populista e intervencionista, derivada del régimen del expresidente Correa.

El autor analiza el escenario y plantea los motivos por los cuáles Ecuador no podrá salir adelante y prosperar, hasta tanto modifique los ejes centrales de la constitución de 2008 y deje de lado ciertas figuras que solamente han servido para deteriorar la democracia y la economía del país.

La reelección de Daniel Noboa en abril de 2025, con un margen de 11 puntos sobre Luisa González, candidata del movimiento correísta, ha renovado las esperanzas de superar el lastre político que dejó Rafael Correa en Ecuador. Sin embargo, es fundamental clarificar que el desafío no consiste en eliminar una opción política legítima –el correísmo, como movimiento electoral, tiene pleno derecho a participar y ganar elecciones como cualquier otra fuerza democrática–, sino en dismantelar un entramado constitucional que obstaculiza el funcionamiento de una democracia liberal en condiciones mínimamente aceptables. Dicho de otro modo, el problema no es el correísmo como grupo, sino las instituciones que lo perpetúan.

El correísmo como modelo institucional fue plasmado en la llamada Constitución de Montecristi de 2008, donde se sentaron las bases jurídicas de su plan político. Este diseño constitucional, instaurado por

lo que podríamos denominar un proyecto ideológico con claras aspiraciones de dominación a largo plazo, debilitó sistemáticamente las instituciones democráticas y fragmentó la sociedad ecuatoriana durante la década que gobernó Correa (2007–2017).

La constitución aprobada en el cantón Montecristi, respaldada mediante un referéndum en 2008 –con un 63,93 % de apoyo– estableció un sistema hecho a la medida del partido gobernante, un entramado sin precedentes en la historia republicana del Ecuador, que solo hace lógica como parte de un proyecto deliberado de hegemonía política. En esencia, la constitución, detrás de supuestos avances en el



reconocimiento de derechos, también sentó las bases para un ejercicio del poder menos sujeto a controles y equilibrios.

Este desequilibrio facilitó múltiples abusos durante el gobierno de Correa: se ejerció un control sistemático sobre el sistema judicial, que dejó de actuar como un poder independiente para convertirse en un instrumento al servicio del Ejecutivo. El poder electoral fue utilizado como herramienta para favorecer al partido gobernante, asegurando la continuidad del proyecto político correísta. Los medios de comunicación independientes

“Durante el gobierno de Correa se ejerció un control sistemático sobre el sistema judicial, que dejó de actuar como un poder independiente para convertirse en un instrumento al servicio del Ejecutivo.”

enfrentaron juicios absurdos y multas millonarias, en un intento por silenciar las voces críticas y consolidar una hegemonía comunicacional. La utilización política de las instituciones se convirtió en una práctica sistemática para perseguir opositores, amedrentar a la disidencia y reprimir cualquier forma de cuestionamiento al poder establecido. Es un arma cargada, que sigue al servicio de quien quiera disparar.

En el plano económico, Montecristi estableció un modelo intervencionista. El artículo 313 y siguientes de la constitución, reservan sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte, refinación de hidrocarburos, agua, biodiversidad y patrimonio genético para el control estatal, limitando significativamente la participación del sector privado. Esta visión estatista de la economía generó ineficiencias, desincentivó la inversión y fomentó la dependencia del Estado, creando un sistema económico clientelar y poco dinámico.

Un elemento adicional que ha complicado el panorama económico es la prohibición constitucional de ceder jurisdicción en disputas comerciales a organismos externos, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), lo que ha generado incertidumbre adicional para los inversionistas internacionales interesados en Ecuador.

Un aspecto crucial de la arquitectura institucional de Montecristi es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), creado como el denominado “quinto poder” con la misión de promover la participación ciudadana y el control social. Sin embargo, este organismo ha sido percibido consistentemente como una extensión politizada de la presidencia, particularmente durante la era de Rafael Correa, comprometiendo seriamente su autonomía. En lugar de actuar como un contrapeso al poder presidencial, el CPCCS se convirtió en un mecanismo para legitimar las decisiones del Ejecutivo y debilitar la

capacidad de la sociedad civil para fiscalizar la gestión pública.

La persistencia electoral del correísmo, que obtuvo 44 % de los votos en la primera vuelta de 2025 y 67 escaños en la Asamblea Nacional, demuestra su extraordinaria resiliencia política. Este hecho no debe interpretarse como algo negativo en sí mismo –toda democracia requiere diversidad de opciones–, sino como evidencia de que el problema trasciende a las personas y se enraíza en las estructuras. El correísmo, a pesar de los escándalos de corrupción y las denuncias de autoritarismo, sigue contando con un apoyo significativo, lo que pone de manifiesto la necesidad de abordar las causas profundas de su arraigo en la sociedad ecuatoriana.



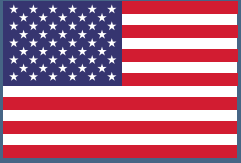
En este escenario, una nueva constitución es necesaria para corregir los desequilibrios de Montecristi. Se requieren cambios profundos para abordar problemas como la apertura de sectores estratégicos a la inversión privada, eliminando restricciones excesivas; la reforma del CPCCS para garantizar la independencia en la designación de autoridades de control; la reconfiguración del sistema judicial para asegurar su autonomía; y el establecimiento de mecanismos claros para resolver disputas con inversionistas extranjeros, equilibrando soberanía y atracción de capital.

El desafío es articular una reformulación profunda del pacto constitucional, alejándose de la visión ideológicamente sesgada de Montecristi hacia un marco institucional equilibrado y pragmático. Esto implica establecer reglas de juego que permitan la convivencia de diversas opciones ideológicas bajo principios democráticos compartidos, y

repensar integralmente las bases del Estado ecuatoriano con una visión menos doctrinaria.

Sin esta transformación, el correísmo como sistema institucional seguirá amenazando la consolidación democrática y el desarrollo económico de Ecuador, perpetuando un modelo insostenible. Es importante enfatizar que los cambios a la Constitución no son una panacea mágica para los problemas de Ecuador. No traerán automáticamente prosperidad y paz. Sin embargo, se presenta como un paso fundamental para asegurar que el sistema político pueda funcionar bajo condiciones mínimas para una democracia viable.





Wazim Mowla

Investigador y líder de la Iniciativa Caribe en el Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council.



Un llamado a la acción del Congreso de EE. UU. para apoyar la soberanía de Guyana

Guyana es hoy un mercado emergente con alto potencial gracias a sus reservas de petróleo y gas, su enfoque en conservación ambiental y el aumento de inversión extranjera que impulsa su economía hacia mayor riqueza y oportunidades.

El gobierno de Maduro reclama la región del Esequibo –más de dos tercios de Guyana– como territorio venezolano, ignorando el Laudo Arbitral de 1899 que definió la frontera entre ambos países.

El tema resulta clave en la estrategia regional de EE.UU. y este artículo expone por qué la administración Trump debe mantener acciones que protejan la independencia de Guyana.

Guyana es el mercado emergente más prometedor del mundo. Sus vastas reservas de petróleo y gas natural, así como su sólida trayectoria en conservación ambiental y el crecimiento de la inversión extranjera directa están transformando su economía en una fuente de gran riqueza y oportunidades. Sin embargo, a pesar de este panorama alentador, persiste un desafío: las tácticas agresivas e intimidatorias del líder autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro.

Desde hace décadas, Venezuela sostiene la afirmación infundada de que la región del Esequibo—más de dos tercios del territorio guyanés— le pertenece, a pesar del Laudo Arbitral de 1899 que resolvió la frontera terrestre entre ambos países. Estas pretensiones volvieron al centro de la atención tras la incursión ilegal de buques de la Armada Venezolana en la Zona Económica Exclusiva de Guyana en marzo de 2025 y el anuncio de Maduro de que celebrará elecciones en el Esequibo para elegir un gobernador a finales de mayo de 2026.

Guyana ha respondido con firmeza a las afirmaciones de Maduro, trabajando estrechamente con Estados Unidos y otros aliados occidentales para fortalecer sus capacidades de defensa y movilizar a su población, generando una nueva ola de nacionalismo centrada en la integridad territorial del país. Frases como “el Esequibo es nuestro” y “ni una brizna de hierba” están presentes en la sociedad guyanesa en programas de radio, conversaciones cotidianas y calcomanías de autos.

No obstante, Guyana no puede defenderse sola; necesita aliados. Afortunadamente, el segundo mandato del presidente Donald Trump ha mostrado el mayor nivel de apoyo a la soberanía e integridad territorial de Guyana por parte de cualquier administración



estadounidense. Durante su visita a Guyana, el secretario de Estado Marco Rubio advirtió que “será un muy mal día para el régimen venezolano si se atreven a atacar a Guyana”. Si bien estas declaraciones son bien recibidas, aún queda más por hacer. Instituciones estadounidenses como el Capitolio pueden desempeñar un papel clave al legislar salvaguardas que perduren más allá de la actual administración.

El crecimiento económico de Guyana ha ido acompañado de un aumento de la agresividad de Maduro. La elección anunciada para designar un gobernador del Esequibo es solo la punta del iceberg. En la última década, Venezuela ha detenido embarcaciones pesqueras guyanesas, ha construido un puente que conecta su territorio continental con la isla guyanesa de Ankoko, y los soldados guyaneses sufren ataques rutinarios en la frontera por parte de bandas armadas. Las acciones de Maduro generan inestabilidad e incertidumbre en todo el hemisferio, dividen a los aliados caribeños y

“Instituciones estadounidenses como el Capitolio pueden desempeñar un papel clave al legislar salvaguardas que perduren más allá de la actual administración.”

generan dudas entre potenciales inversores estadounidenses.

Para Estados Unidos, esto debe ser preocupante, ya que Guyana es un aliado estratégico. Desde el descubrimiento de más de 11.000 millones de barriles de petróleo frente a su costa, el país se ha convertido en una de las economías de más rápido crecimiento del mundo y en un imán para la inversión estadounidense, con un crecimiento del PIB superior al 40 % en 2024. Su ubicación en el extremo norte de América del Sur – limitando con Surinam y Brasil – y su compromiso con la democracia y el desarrollo sostenible lo convierten en un socio clave para el comercio, la seguridad y la competencia con China.



Esto ha llevado a que Estados Unidos –bajo diversas administraciones– profundice sus vínculos con Guyana. En apenas cinco años, el país ha recibido la visita de tres secretarios de Estado; ha firmado un préstamo de más de 500 millones de dólares con el Banco de Exportaciones e Importaciones de EE. UU.; y ha visto a grandes empresas estadounidenses invertir en su economía petrolera y no petrolera.

Entonces, ¿qué apoyo adicional

puede proporcionar Estados Unidos para ayudar a disuadir nuevas agresiones de Venezuela y los riesgos que estas conllevan? Los miembros del Congreso pueden ser aliados fundamentales. Primero, pueden presentar legislación que reconozca la validez del Laudo Arbitral de 1899, que estableció la frontera entre Guyana y Venezuela. Actualmente, la validez del laudo está en manos de la Corte Internacional de Justicia, que se espera emita su fallo en 2026. Una legislación posterior –que probablemente será favorable a Guyana– puede consolidar la posición estadounidense a largo plazo respecto a ese laudo.

Segundo, los congresistas deberían considerar incluir asistencia específica de seguridad para la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF) en la próxima versión de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (actualmente ante el 119.º Congreso). Esto ayudaría a fortalecer la capacidad de la GDF para monitorear, patrullar y defender su frontera terrestre y marítima con Venezuela. Guyana, con

menos de un millón de habitantes y un territorio de aproximadamente 215.000 km², necesita tecnologías de defensa que compensen las limitaciones humanas para mantener vigilancia constante contra incursiones venezolanas, actividades de bandas armadas y minería ilegal.

Además, Maduro se beneficia de la desinformación y del miedo, utilizando la controversia fronteriza con Guyana como una estrategia para ganar atención internacional y avivar el nacionalismo interno. Es probable que estas tácticas continúen mucho después de la actual administración estadounidense, y no existe garantía de que futuros presidentes o secretarios de Estado adopten una postura igual de firme en defensa de la soberanía guyanesa. Por ello, aprovechar el momento actual es esencial: trabajar de la mano con la administración Trump para construir un apoyo estadounidense a Guyana que perdure décadas, no solo cuatro años.



AGENDA

Revista

Dirección:

Carlos Díaz-Rosillo
Julián Obiglio

Edición y diseño:

Fundación Nuevas Generaciones
(Argentina)

Consejo editorial:

Diego Guelar, Martín Santiváñez Vivanco,
Paulo Neves, Juan Salafranca, Antonio
Garrastazu, Casey Cagley, Jatzel Roman,
Aparicio Caicedo, Fernando Straface,
Francisco Chahuán.

Más información:

www.freedom.fiu.edu
www.nuevasgeneraciones.com.ar
freedom@fiu.edu
contacto@nuevasgeneraciones.com.ar

*Las opiniones expresadas son de responsabilidad
exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan el
criterio de los directores o de las instituciones
auspiciantes.*

*Publicación de distribución gratuita, sin fines de lucro.
Prohibida su comercialización.*

*Su contenido puede ser replicado total o parcialmente
citando la fuente.*